

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA LA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL EN LA LEY N° 19.640, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES QUE REGULAN ACTUACIONES DE LOS FISCALES Y DE LAS FISCALÍAS REGIONALES

Boletín N° 16.850-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje S.E. el Presidente de la República don Gabriel Boric Font ingresado a tramitación el 20 de mayo de 2024, e informado en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La referida iniciativa, se encuentra con urgencia calificada de Suma.

Asistieron en representación del Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega junto con la Asesora, señora Sthefanía Walser y los abogados de la División Jurídica, Tamara Carrera y Rodrigo Hernández.

Asimismo, asistió el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia Vásquez junto con Ana María Morales Peillard, Gerente División de Estudios; Gonzalo Droguett López, Profesional División de Estudios.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1) Idea matriz o fundamental del proyecto:

Enfrentar el crimen organizado transnacional, considerado la principal amenaza a las democracias y a la estabilidad de los sistemas políticos en el continente, mediante la incorporación de la Fiscalía Supraterritorial creada en la ley N° 21.644¹, que modificó la Carta Fundamental, en febrero de 2024, en el Ministerio Público, con dotación propia y competencia nacional y suprarregional, para llevar adelante investigaciones de carácter nacional y regional, como asimismo, en investigaciones de alta complejidad, todo ello, en el contexto de obtener una visión integral para enfrentar preparados como país, estos desafíos.

2) Comisión técnica:

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

3) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

No hubo en este trámite nuevas normas que calificar en tal condición.

¹ Modifica la carta fundamental para crear la fiscalía supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del ministerio público. Diario Oficial de 2 de febrero de 2024.

4) Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidos por esta Comisión de Hacienda:

De conformidad con el numeral 5 del artículo 302 y el artículo 226 del Reglamento, la Comisión Técnica señaló a los numerales 25) y 26) del artículo 1°.

Asimismo, debe conocer el nuevo artículo 2°, y los artículos segundo y tercero transitorios que se han incorporado en la indicación presentada por el Ejecutivo en este trámite, toda vez, que dichas normas fueron rechazadas en la Comisión Técnica.

5) Artículos modificados:

No hubo.

6) Indicación rechazada:

No hubo.

7) Artículos nuevos

El Ejecutivo presentó una indicación para reponer los artículos rechazados en la Comisión Técnica, con los siguientes textos:

ARTÍCULO 2°, NUEVO

Para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes:

“Artículo 2°.- Incrementase la planta del Ministerio Público, contenida en el artículo 72 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, creándose, en la planta de personal, noventa y siete nuevos cargos, en los términos y la cantidad que a continuación se indican:

- a) Para el cargo de Fiscal Adjunto, incrementase el número de cargo en 34.
- b) Para el cargo de Profesionales, incrementase el número de cargo en 43.
- c) Para el cargo de Técnicos, incrementase el número de cargo en 14.
- d) Para el cargo de Administrativos, incrementase el número de cargo en 6.”.

“ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, NUEVO

2) Para agregar, a continuación del artículo primero transitorio, el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo segundo transitorio.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero transitorio, las modificaciones al artículo 72 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, introducidas en la presente ley por el numeral 25 del artículo 1° y por el artículo 2°, tendrán lugar conforme con la gradualidad que a continuación se indica:

CARGO/GRADOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE CARGOS		
	A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY	A PARTIR DEL DÍA 1 DEL DÉCIMO TERCER MES CONTADO DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY	A PARTIR DEL DÍA 1 DEL VIGÉSIMO QUINTO MES CONTADO DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY
FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA SUPRATERITORIAL GRADO III	1		
FISCAL ADJUNTO GRADOS IV-VIII	14	20	
PROFESIONALES VI-XI	19	19	5
TÉCNICOS IX-XIV	6	6	2
ADMINISTRATIVOS XI-XVII	3	3	

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

3) Para agregar, a continuación del artículo segundo transitorio, nuevo, el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo tercero transitorio.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de la presente ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Público. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

8) Diputado informante: El señor Alexis Sepúlveda Soto

II.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.-En el año 2012, el Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto que creaba “una Fiscalía Especial para dirigir las investigaciones y sostener la acción penal en los casos de delitos de alta complejidad, como una forma de propender al fortalecimiento institucional del Ministerio Público.

2.-Por su parte, en 2014, la Presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional, que creaba el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad, y establecía la existencia de un Fiscal Jefe Especial.

3.-No obstante, a diferencia de dichas iniciativas, en esta oportunidad el esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional logró materializar su propósito mediante la dictación de la ley N° 21.644, que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público, publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero del presente año 2024.

4.-Con todo, aquella modificación constitucional requiere, para su entrada en vigencia, la materialización de cambios a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Son estas modificaciones las que buscan introducirse con este mensaje.

III.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA:

El proyecto de ley se estructura sobre la base de 7 artículos permanentes y dos disposiciones transitorias, toda vez, que fueron rechazadas en la Comisión Técnica, esto es, la disposición segunda que trata la gradualidad del incremento de los cargos y la tercera, que señala la fuente de los recursos asociado al gasto del proyecto.

Las leyes que se modifican son las siguientes, en cuanto al texto aprobado por la Comisión de Constitución de Legislación, Justicia y Reglamento.

Artículo 1°.- Modifica la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público

Artículo 2°: Modifica el Código Procesal Penal

Artículo 3°.- Modifica el artículo 17 de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses,

Artículo 4° - Modifica el numeral 6) del artículo 4° de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en el siguiente sentido:

Reemplazáse la conjunción “y” por una coma.

Agrégase, entre la palabra “regionales” y el punto que le sigue, la frase “y el Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial”.

Artículo 5°.- Agrégase, en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, entre la palabra “Regional” y el punto y aparte que le sigue, la frase “o del Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según corresponda”.

Artículo 6° - Para los fines de la presente ley, salvo que de su texto se desprenda un significado distinto, todas las referencias que en la ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público, se efectúen a las Fiscalías Regionales y a los Fiscales Regionales, se deberán entender realizadas también a la Fiscalía Supraterritorial y a su Fiscal Jefe, respectivamente.

Artículo 7°.- A contar de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las referencias legales y reglamentarias efectuadas al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos deberán entenderse realizadas al Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad.

Por su parte, la disposición transitoria, indica la entrada en vigencia de la ley, esta es, una vez transcurrido el plazo de seis meses contados desde su publicación..

En cuanto a la estructura del Mensaje, los artículos permanentes del proyecto incorporan a la Fiscalía Supraterritorial, su Fiscal Jefe, y el nuevo Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad.

La Fiscalía Supraterritorial implica un cambio sustancial en el modelo organizacional del Ministerio Público, que se refuerzan las atribuciones del Fiscal Nacional en relación con la persecución penal; junto con regular el modelo orgánico de la

Fiscalía Supraterritorial, se crea el Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, reforzando los actuales sistemas de análisis de información del Ministerio Público, y que la Fiscalía Supraterritorial contará con fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo propio, que podrá ser distribuido en todo el país.

El texto aprobado por la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento rechazó los artículos que han sido repuestos en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en esta Comisión de Hacienda y que se consignan en el debate.

IV.-ANTECEDENTES ELABORADOS POR BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL

El proyecto de ley actualmente en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados (Boletín N° 16.850-07), crea la Fiscalía Supraterritorial cuya función será llevar adelante investigaciones penales de hechos asociados al crimen organizado o de alta complejidad, y cuya investigación requiera una dirección supraterritorial o transnacional.

La Fiscalía se crea dentro del marco legal que regula el Ministerio Público, sumándose a la Fiscalía Nacional y las Fiscalías Regionales. Para su creación el artículo 2° del proyecto de ley incorpora a la planta del Ministerio Público a 87 funcionarios dentro de las cuales se cuentan: 1 fiscal jefe, 34 fiscales adjuntos, 39 profesionales, 8 técnicos y 5 administrativos (SEGPRES,2024a)

Los sueldos y los materiales y computadores necesarios para el desempeño de los funcionarios nuevos explican el mayor gasto fiscal de la propuesta, que se estima en régimen en \$7,595 millones de pesos en moneda de 2024, siendo los sueldos de los nuevos funcionarios el 90.35% del costo del proyecto de ley (\$6,862 millones de pesos en sueldos) (SEGPRES, 2024a).

Tabla n°1. Número de cargos que se crean y sueldos brutos asociados según escalafón. Año 2024

GRADO	Escalafón/Sueldos Brutos	Fiscales	Profesionales	Técnicos	Administrativos
1	\$12,843,104				
2	\$12,843,102				
3	\$9,112,616	Fiscal Jefe (Grado3)			
-4	\$8,516,183	34 Fiscales adjuntos (Grado del 4 al 8)	39 (Grado del 6 al 11)		
5	\$7,485,876				
6	\$6,653,916				
7	\$5,780,886				
8	\$4,723,491				
9	\$4,447,190				
10	\$3,014,531				
11	\$2,576,516				
	Escalafón Técnico				
9	\$2,935,457			8 (Grado del 9 al 14)	
10	\$2,721,733				
11	\$2,323,699				
12	\$2,012,063				
13	\$1,880,883				
14	\$1,682,264				
	Escalafón Administrativo				

11	\$1,783,485	5 (Grado del 11 al 19)
12	\$1,626,038	
13	\$1,543,739	
14	\$1,435,821	
15	\$1,351,751	
16	\$1,240,987	
17	\$1,161,115	
18	\$1,099,779	
19	\$1,009,707	

Fuente: Transparencia activa

Para entregar mayores antecedentes sobre el gasto fiscal en sueldos que implica el proyecto, en la tabla N°1 se muestra escalafón de sueldos del Ministerio Público por grados y el rango de grados al que se asignan a los nuevos funcionarios.

Gradualidad de la propuesta

Dicho lo anterior el proyecto de ley establece una gradualidad de 4 años para la contratación de los 87 funcionarios nuevos, la que queda expresada en la siguiente tabla.

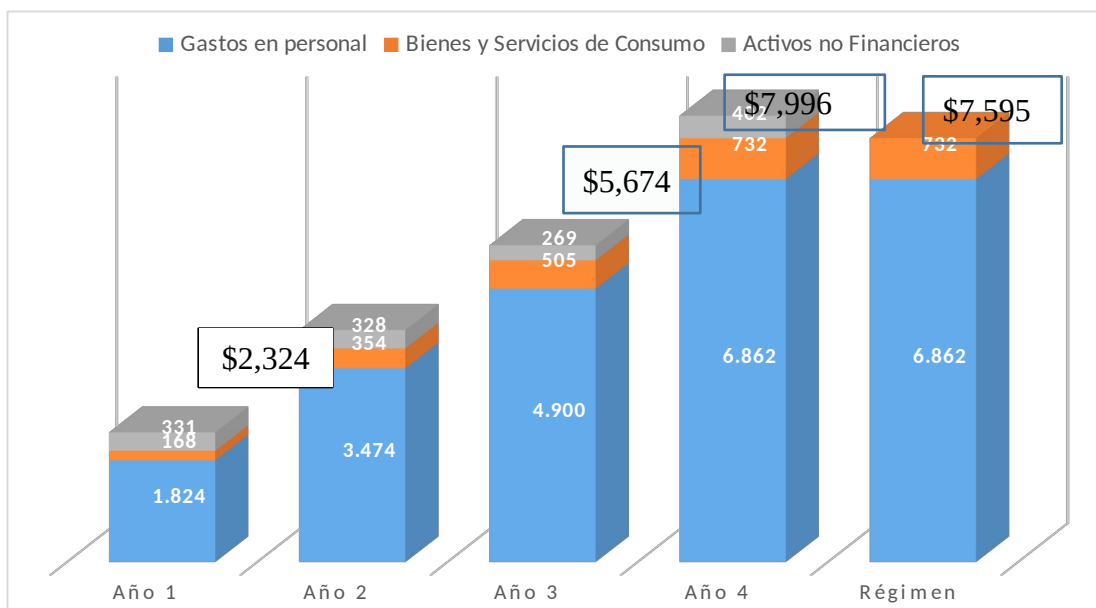
Tabla N°2. Gradualidad de la contratación de nuevos funcionarios

Cargos	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4 (régimen)
Fiscales	11	19	26	35
Profesionales	8	18	27	39
Técnicos	1	3	4	8
Administrativos	0	2	3	5
Total	20	42	60	87

Fuente: Informe Financiero del PDL.

El gasto fiscal asociado a la gradualidad de 4 años se puede observar en el siguiente gráfico. El gasto asociado al proyecto de ley en personal, bienes y servicios de consumo y activos no financieros crece a medida que se van contratando nuevos funcionarios hasta llegar a un gasto total en régimen de \$7,595 millones de pesos. Cabe señalar que en régimen el gasto en activos no financieros desaparece dado que corresponden a la compra de bienes durables, quedando permanente el gasto en personal y en bienes y servicios de consumo.

Gráfico N°1. Gasto fiscal por año y en régimen con la gradualidad propuesta en el PDL. Pesos 2024



Fuente: Elaboración propia en base a informe financiero del

PDL

Cabe señalar que el Ejecutivo ingresó una indicación durante el trámite del proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que reducía la gradualidad a 2 años. Tanto la idea original como la indicación fueron rechazadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (SEGPRES, 2024b)

Indicación ingresada por ejecutivo el 13 de agosto de 2024

Una nueva indicación fue ingresada el 13 de agosto de 2024 (SEGPRES, 2024c), la que modifica la contratación de funcionarios para la creación de la fiscalía en tres aspectos sustantivos:

Aumento del número de contrataciones de 87 a 97

Aumento del mayor gasto que en régimen pasa de \$7,595 millones a \$7,691 millones

Una gradualidad en la contratación de tres años

En la tabla n°2 se puede observar el impacto de dicha indicación en la contratación de los nuevos funcionarios, mientras que en el gráfico n°2 se puede observar el impacto sobre el gasto fiscal de la nueva gradualidad propuesta.

Tabla N°3. Gradualidad de la contratación de nuevos funcionarios

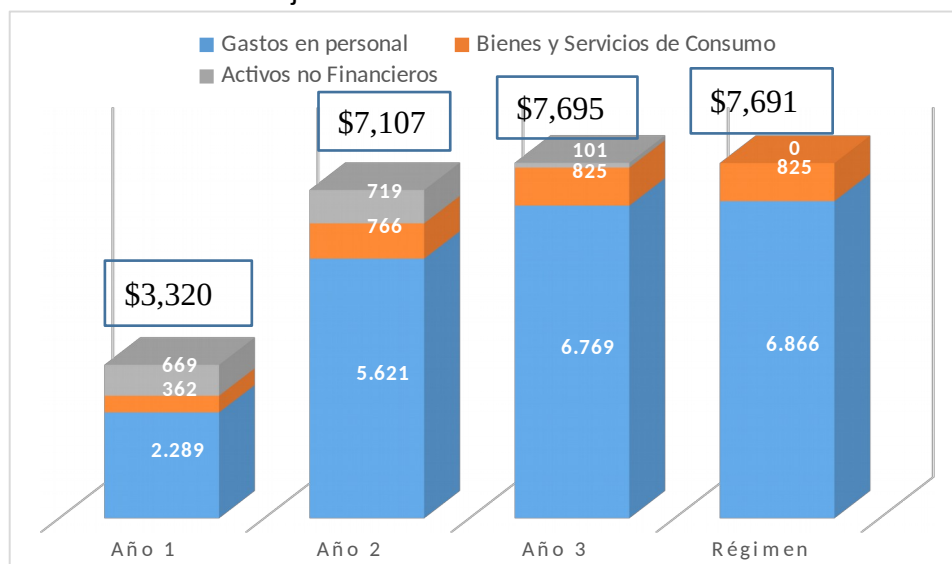
Indicación del ejecutivo

Tabla 1. Nueva dotación Fiscalía Supraterritorial

Cargos	Año 1	Año 2	Año 3 (régimen)
Fiscales ¹	15	35	35
Profesionales	19	38	43
Técnicos	6	12	14
Administrativos	3	6	6
Total	43	91	98

Fuente: Informe Financiero indicación

Gráfico n°2. Gasto fiscal por año y en régimen con la gradualidad propuesta en el PDL
Indicación del Ejecutivo



Fuente: Informe financiero (indicación)

Impacto del mayor gasto sobre el presupuesto del Ministerio Público, en régimen.

El presupuesto fiscal del Ministerio Público corresponde a la partida 23, capítulo 01, programa 01 del presupuesto fiscal aprobado para el año 2024. El presupuesto del Ministerio Público asciende a 258,012 millones de pesos.

El gasto presupuestado para el Ministerio Público se puede observar en la columna 1 de la siguiente tabla N°4. De ésta es posible señalar que gran parte del presupuesto corresponde a gasto en personal y bienes y servicios de consumo. Sumados ambos ítems presupuestarios dan un total de 247,864 millones de pesos lo que representa un total de 96.08% del gasto presupuestado.

En la columna dos de la tabla se puede observar el aumento de gasto que incorporaría el proyecto de ley en régimen al presupuesto del Ministerio Público, por un total de 7,595 millones de pesos por aumento de gasto en personal, aumento de gasto en bienes y servicios. Lo anterior impactaría en un crecimiento de un 2.94% del gasto en régimen del Ministerio Público. Con la indicación presentada por el Ejecutivo el gasto aumentaría a 7,691 lo que significaría un incremento de un 2.98% en el gasto del ministerio público. Lo anterior se puede observar en la tabla N°4.

Tabla N°4. Gasto del Ministerio Público e incremento por PDL

Ley de presupuestos 2024
Pesos de 2024²

	Presupuesto .2024	PDL	Presupuesto 2024+PDL	Var %	Indicación	Presupuest o 2024 + Indicación	Var %
GASTOS	258,012	7,595	265,606	2.94%	7,691	265,703	2.98%
Gastos en Personal	199,548	6,862	206,410	3.439 %	6,866	206,414	3.441%
Bienes y Servicios de	48,345	732	49,077	1.51%	825	49,170	1.71%

² Algunos totales pueden no representar la suma de las partes por ajustes decimales.

Consumo							
Prestaciones de Seguridad Social	462	0	462	0.00%	0	462	0.00%
Transferencias Corrientes	1,135	0	1,135	0.00%	0	1,135	0.00%
Integros al Fisco	1	0	1	0.00%	0	1	0.00%
Adquisición de Activos no Financieros	2,885	0	2,885	0.00%	0	2,885	0.00%
Iniciativas de Inversión	5,636	0	5,636	0.00%	0	5,636	0.00%
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%

Fuente: Elaboración propia en base a Dipres y PDL

Cabe señalar que en la gradualidad de la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, el proyecto considera un gasto en adquisición de activos no financieros por un monto total de \$1.330 millones de pesos. Este gasto es transitorio y desaparece durante el régimen de la propuesta, no obstante si es que este gasto se hiciese en un año implicaría un aumento del gasto total del Ministerio Público de un 0.52%.

Con la indicación rechazada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que fue comentada más arriba, este gasto aumentaría a \$1,498 millones de pesos, lo que incrementaría el gasto del Ministerio Público de un año en un 0.58%. Este crecimiento sería transitorio, tal como ya se mencionó.

Por último cabe dar cuenta de las fuentes de ingreso con las que se financia el presupuesto del Ministerio Público, las que se pueden observar en la tabla N°5

Tabla N°5. Ingresos del Ministerio Público
Ley de presupuestos 2024
Pesos de 2024

	Presupuesto 2024
INGRESOS	258,012
Transferencias Corrientes	0
Otros Ingresos Corrientes	2,739
Aporte Fiscal	254,191
Transferencias para Gastos de Capital	1,081
Saldo Inicial de Caja	0

Fuente: Dipres, ley de presupuestos 2024

V.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

Primer informe financiero

El Ejecutivo, con fecha 17 de mayo del año en curso presentó el informe financiero N°131 elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda el que señaló la incidencia presupuestaria y la fuente de los recursos asociados al mayor gasto fiscal en régimen

Segundo informe financiero

Posteriormente mediante informe financiero N°214, de 5 de agosto, con motivo de la presentación de indicaciones por el Ejecutivo, sustituye el anterior en lo que se refiere a cambios en la definición de los casos en que el Fiscal Nacional deberá asignar la investigación a la Fiscalía Supraterritorial.

Por otra parte, se modifica la gradualidad de la dotación nueva que constituirá la Fiscalía Supraterritorial, acortándose de cuatro a dos años su instalación completa.

Tercer informe financiero

Posteriormente, con motivo de indicaciones presentadas en esta Comisión de Hacienda, las que reponen los artículos rechazados en la Comisión Técnica, que dicen relación con el incremento de la planta, en 18 cargos, con un total de 98, con la gradualidad del incremento y con la fuente de los recursos, ingresa el IF N° 220 de 13 de agosto el que señala el gastos final del proyecto de ley

EFFECTOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL

Las indicaciones al proyecto de ley implicarán un mayor gasto fiscal en relación con lo contenido en los Informes Financieros antecedentes, debido al aumento y ajuste de la gradualidad para la dotación de la Fiscalía Supraterritorial.

Tabla 1. Nueva dotación Fiscalía Supraterritorial

Cargos	Año 1	Año 2	Año 3 (régimen)
Fiscales ¹	15	35	35
Profesionales	19	38	43
Técnicos	6	12	14
Administrativos	3	6	6
Total	43	91	98

De esta manera, la implementación del proyecto de ley irrogará un mayor gasto fiscal desde el primer año por \$3.320 millones hasta los \$7.691 millones en régimen.

Tabla 2. Efecto gasto fiscal Proyecto de Ley

Millones de pesos de \$ 2024

Subtítulo	Año 1	Año 2	Año 3	Régimen
Gastos en personal	2.289	5.621	6.769	6.866
Bienes y servicios de consumo	362	766	825	825
Adquisición de activos no financieros	669	719	101	0
Total	3.320	7.107	7.695	7.691

Nota: El gasto en personal en los años 1, 2 y 3, sólo considera nueve meses, debido al reconocimiento de la demora en los procesos de contratación asociados a concursos.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio Público. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes, se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

VI.- SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

La Comisión recibió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega

Comenzó su intervención subrayando la relevancia de presentar los aspectos relacionados con la Comisión de Hacienda en el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, pero también consideró necesario abordar el contexto más amplio de la reforma institucional del Ministerio Público. Esta reforma está estrechamente relacionada con el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, lo que implica que cualquier referencia a dotaciones y recursos debe ser vista en el marco de este esfuerzo integral para robustecer la capacidad de la Fiscalía en Chile.

Expresó que la Fiscalía Supraterritorial es una de las reformas más significativas al diseño del Ministerio Público desde su creación. Este proyecto, surgido a partir de la reforma constitucional discutida en el Congreso Nacional, otorga al Fiscal Nacional nuevas atribuciones para investigar y perseguir delitos relacionados con organizaciones criminales y de alta complejidad. Hasta ahora, el modelo del Ministerio Público no permitía un rol tan protagónico para el Fiscal Nacional en este tipo de indagaciones. Esta reforma dota al Fiscal de la capacidad de designar la Fiscalía Supraterritorial y de emitir instrucciones particulares en casos que lo requieran, transformando de manera profunda el funcionamiento del Ministerio Público.

Insistió en que la Fiscalía Supraterritorial no puede ser comprendida de manera aislada, sino que debe verse en conjunto con el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Constitución del Senado. Durante este proceso, se han realizado observaciones importantes, algunas de las cuales han llevado a modificar la gradualidad del proyecto de ley, permitiendo una inyección de recursos y personal en el segundo año de implementación. Esto es crucial porque las observaciones realizadas por el Ministerio

Público señalaban que la caída de personal, especialmente de fiscales, podría comprometer los objetivos de la estrategia actual del Ministerio Público.

El Ministro Cordero también explicó que, en el caso de la Fiscalía Supraterritorial, las competencias que se le otorgan van más allá de simplemente reforzar las atribuciones del Fiscal Nacional. Incluyen también la creación de un sistema de análisis criminal y de combate al crimen organizado, lo que constituye un cambio estructural significativo en la manera en que el Ministerio Público aborda estos desafíos. Por ello, enfatizó que tanto el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público como el de la Fiscalía Supraterritorial deben ser vistos como esfuerzos complementarios que buscan robustecer no solo las competencias, sino también las dotaciones del Ministerio Público.

Durante su presentación, señaló que el Ejecutivo originalmente presentó un informe financiero que contemplaba una gradualidad de cuatro años para la implementación del proyecto de la Fiscalía Supraterritorial. Sin embargo, este diseño fue objeto de observaciones por parte del Ministerio Público, que cuestionó tanto la oportunidad como las características de esta gradualidad. En respuesta, el Ejecutivo trabajó para reducir la gradualidad a dos años, un esfuerzo que propone una gradualidad de tres años y un aumento en las dotaciones de personal.

Presentó a la Comisión de Hacienda los detalles de cómo se distribuirían estos nuevos cargos a lo largo de los tres años, destacando que en el primer año se crearían 23 nuevos puestos, seguidos por 49 en el segundo año. Este enfoque refleja un esfuerzo fiscal significativo por parte del Estado, destinado a asegurar que la Fiscalía Supraterritorial esté equipada adecuadamente para cumplir con sus nuevas responsabilidades.

El Ministro también subrayó que durante los últimos años no ha habido otra institución en Chile que haya recibido un apoyo financiero tan significativo para su fortalecimiento institucional como el Ministerio Público. Este apoyo, argumentó, es una muestra del compromiso del Estado chileno para fortalecer la capacidad del Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos de alta complejidad. Mencionó que, junto con el Ministerio Público, el Servicio de Biodiversidad y los servicios vinculados al cumplimiento tributario son otras áreas donde el Estado ha invertido significativamente en fortalecimiento institucional, pero enfatizó que el apoyo al Ministerio Público ha sido particularmente destacable.

Concluyó haciendo un llamado a los miembros de la Comisión de Hacienda para que consideren este proyecto en su totalidad, teniendo en cuenta no solo los aspectos financieros, sino también la relevancia estratégica que tiene para el futuro del Ministerio Público en Chile. Destacó que el proyecto de Fiscalía Supraterritorial es un componente crucial de una reforma más amplia que busca dotar al Estado de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del crimen organizado y mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia en su conjunto.

A continuación, expuso el Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia Vásquez. Comenzó su intervención destacando el valor del proyecto aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara, que modifica la orgánica del Ministerio Público. Consideró que este proyecto es una contribución significativa al combate del crimen organizado, tanto transnacional como transregional. Alineándose con el Ministro de Justicia, subrayó la trascendencia de esta reforma para el Ministerio Público, y valoró la calidad y celeridad del trabajo legislativo realizado por la Comisión de Constitución.

Explicó que la Fiscalía Supraterritorial, tal como se propone en el proyecto, es una aspiración de larga data del Ministerio Público, que ha ido madurando

con el tiempo en respuesta a los desafíos crecientes en el combate a la criminalidad. Destacó que esta no es una idea reciente, sino que se ha venido desarrollando en paralelo con la tramitación de la reforma constitucional que la creó. Explicó que, desde la concepción del Ministerio Público en los años 90, el enfoque estaba en fortalecer la regionalización, lo que llevó a una estructura donde los fiscales regionales tienen una gran autonomía, sin reglas claras para coordinarse entre sí en la lucha contra fenómenos criminales que cruzan fronteras regionales.

Señaló que el modelo actual del Ministerio Público, altamente regionalizado, ha demostrado ser insuficiente para enfrentar nuevos desafíos, como el combate al crimen organizado transnacional. Este fenómeno criminal, sin precedentes en la historia republicana de Chile, requiere una mayor coordinación entre las fiscalías regionales, algo que el diseño original del Ministerio Público no facilita. Mencionó que, en la Región Metropolitana, por ejemplo, existen cuatro fiscalías regionales que pueden operar de manera descoordinada, lo que genera ineficiencia y debilidades que las bandas criminales pueden explotar.

A lo largo de su exposición, el Fiscal destacó ejemplos de cómo esta falta de coordinación ha afectado la eficacia de las investigaciones. Citó casos en la macrozona sur, donde los fiscales han tenido que coordinarse para enfrentar fenómenos como el hurto de madera, y en la zona norte, donde la fiscalía de Tarapacá ha liderado investigaciones contra el Tren de Aragua. Sin embargo, cuando estas organizaciones criminales extienden sus operaciones a otras regiones, la falta de un sistema centralizado de coordinación dificulta el control y la eficacia de las investigaciones.

Comparó la situación de Chile con otros países que han enfrentado desafíos similares y han adoptado modelos de fiscalías centralizadas para combatir el crimen organizado de manera más eficaz. Mencionó la Audiencia Nacional de España, la Fiscalía Nacional Antimafia de Italia, y el sistema federal de Estados Unidos como ejemplos de modelos que han logrado centralizar la persecución de crímenes complejos, respetando al mismo tiempo las autonomías regionales.

Respecto a la estructura de la Fiscalía Supraterritorial, el Fiscal explicó que esta será una entidad relativamente pequeña, pero altamente especializada. Aunque la estructura pueda parecer limitada en tamaño, su diseño responde a la necesidad de concentrar esfuerzos en los casos más graves y complejos. Enfatizó la importancia de contar no solo con fiscales, sino también con equipos de analistas, quienes desempeñan un papel crucial en la investigación de estos casos.

También abordó el tema de la ubicación y organización de la Fiscalía Supraterritorial. Originalmente, se había concebido como una entidad centralizada en Santiago, lo que permitiría aprovechar economías de escala en la administración y el apoyo logístico. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria, se consideró conveniente establecer delegaciones macrozonales, lo que implica la necesidad de un mayor número de personal de apoyo en distintas regiones. Esta nueva estructura, aunque valorada por el Ministerio Público, requiere un ajuste en la dotación de personal, lo que ha llevado a solicitar un incremento en los recursos asignados al proyecto.

Finalmente, el Fiscal Nacional hizo referencia a las discusiones sobre la gradualidad de la implementación del proyecto, un tema que considera de gran relevancia tanto política como financieramente. Explicó que, aunque se reconoce la necesidad de adaptar la implementación a las realidades fiscales, el combate al crimen organizado no puede esperar, y la falta de recursos podría comprometer la eficacia de la Fiscalía Supraterritorial desde el principio. Concluyó su intervención subrayando la importancia estratégica de esta nueva estructura para enfrentar los desafíos del crimen organizado en Chile y solicitó el apoyo de la Comisión para asegurar que se cuente con los recursos necesarios para su correcta implementación.

El Diputado Sepúlveda expresó su preocupación por retrasar la discusión de un proyecto urgente por la semana distrital, subrayando la importancia de abordarlo de inmediato, especialmente considerando la aprobación de proyectos menos urgentes como el de las carreras de galgos. Reconoció las limitaciones presupuestarias mencionadas por el Fiscal Nacional, pero enfatizó la necesidad de asignar más recursos al Ministerio Público para fortalecer su capacidad de investigación, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. Destacó que, aunque siempre habrá restricciones financieras, es crucial avanzar con este proyecto para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, y solicitó al Ejecutivo que considere la posibilidad de complementar los recursos necesarios para alcanzar un nivel óptimo de operación.

El Diputado Mellado planteó dos cuestiones principales: primero, preguntó si el Fiscal Nacional tendrá la autoridad para acelerar cualquier causa en todo el país o si su enfoque estará exclusivamente en temas de crimen organizado, separado de las causas normales. Segundo, expresó su preocupación sobre la dotación de personal, señalando que, aunque se aumenten los fiscales, es necesario contar con suficiente personal de apoyo, como PDI y Carabineros, para que el trabajo del Fiscal sea efectivo. También cuestionó la gestión de los recursos asignados al plan contra el crimen organizado, sugiriendo que, en lugar de buscar nuevos fondos, se reasignen los ya existentes, ya que no se han utilizado completamente, como ocurrió con los fondos destinados a Carabineros y la PDI en años anteriores.

El Diputado Donoso expresó dudas sobre la inclusión de la macrozona en el proyecto, ya que no aparece en el documento comparado que tienen los parlamentarios. Además, preguntó al Fiscal Nacional si, con la dotación propuesta, la Fiscalía estaría en condiciones de combatir eficazmente el nivel actual de crimen organizado en el país. Finalmente, cuestionó si la diferencia económica entre lo ideal planteado por el Fiscal Nacional y el presupuesto asignado, que es de alrededor de 7.691 millones de pesos, sería sostenible para el Estado a largo plazo, dado que representaría una carga adicional de aproximadamente 1,2 mil millones de pesos anuales.

El Diputado Naranjo expresó su apoyo a la idea de una fiscalía supraterritorial para abordar los nuevos fenómenos que están surgiendo en el país, como las asociaciones ilícitas relacionadas con bandas de alcaldes y abogados que cometen actos de corrupción, como en el caso Hermosilla. Manifestó su sorpresa de que el Fiscal Nacional no haya mencionado estos fenómenos en su exposición, concentrándose únicamente en el crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Preguntó si esta fiscalía supraterritorial también abordará estas nuevas formas de asociación ilícita. Además, expresó su desconcierto por la situación en la que el Fiscal Nacional solicita más fondos, a pesar de que el informe financiero del gobierno ya ha sido acordado, sugiriendo que esto parece una falta de respeto y una situación inusual en el Congreso.

El Diputado Barrera señaló que, según estadísticas del año pasado, cada fiscal estaba manejando más de 1.700 causas. Preguntó cómo se proyecta que esta carga de trabajo se reducirá con la nueva dotación propuesta y solicitó una evaluación sobre el impacto que esto podría tener en la mejora de la situación, reconociendo que sin duda sería un aporte importante.

El Diputado Cifuentes solicitó que se levante la sesión, argumentando que el tiempo se ha agotado y que el proyecto en discusión no debe apresurarse. Expresó que hay muchas preguntas pendientes y se mostró sorprendido por la ausencia de representantes del Ministerio de Hacienda, lo que consideró inusual. Por ello, insistió en que se debe reanudar la discusión en una sesión futura para abordarla adecuadamente.

El Ministro Cordero informó que el Ejecutivo presentó un informe financiero esta semana en el que se ha aumentado la dotación de personal para la Fiscalía Supraterritorial, pasando de 87 a 98 puestos. Este incremento es parte de los esfuerzos finales del Ejecutivo para mejorar la dotación de la Fiscalía y asegurar que cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.

El Diputado Bianchi (Presidente) se refirió a las discusiones sobre la falta de recursos para el proyecto de Fiscalía Supraterritorial, un punto destacado por el Fiscal Nacional en la sesión anterior. Enfatizó la importancia y urgencia del proyecto, subrayando que es esencial para la seguridad del país. Expresó que, como presidente de la comisión, está comprometido a darle el tiempo necesario para una discusión profunda, pero también reconoció la necesidad de avanzar con celeridad. Mencionó que, tras conversar con el Fiscal Nacional, quien confirmó la falta de recursos, considera crucial retomar este punto y buscar una solución, esperando que los Ministros de Hacienda y de Justicia puedan responder a las preocupaciones planteadas.

El Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia Vásquez, comenzó su intervención mencionando que deseaba responder algunas preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior, relacionadas con la dotación de personal y la competencia de la Fiscalía Supraterritorial. Explicó que, aunque el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial podría tener un impacto positivo en la reducción de la carga de trabajo de los fiscales, este impacto sería mínimo. Subrayó que la resolución del problema de sobrecarga de trabajo recae principalmente en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que incluye recursos adicionales para entrevistas investigativas, atención a víctimas, y la creación de turnos de flagrancia con dotaciones adecuadas. Este plan, según explicó, ha sido negociado y aprobado por el Ejecutivo y el Senado, aunque no con los recursos que el Ministerio Público consideraba ideales, pero sí con un esfuerzo fiscal significativo.

Enfatizó que el propósito principal de la Fiscalía Supraterritorial no es aliviar la carga de trabajo general de los fiscales, sino crear un equipo especializado que se concentre en investigar delitos de alta complejidad y crimen organizado, especialmente aquellos que involucran asociaciones criminales con actividades trasregionales o transnacionales. Este equipo estará compuesto por 34 fiscales y se coordinará con los equipos regionales para llevar a cabo investigaciones relacionadas con el narcotráfico, el hurto de madera, la trata de migrantes y otros delitos similares.

En su explicación sobre la estructura de la Fiscalía Supraterritorial, el Fiscal Nacional mencionó que inicialmente se concibió como una entidad centralizada en Santiago, lo que permitiría aprovechar economías de escala. Sin embargo, durante la discusión parlamentaria, se reconoció la necesidad de establecer delegaciones macrozonales para abordar de manera más eficaz los problemas específicos de diferentes regiones, como el narcotráfico en las zonas portuarias. Este cambio fue acogido como una idea valiosa, aunque implicó ajustes en la dotación de personal y la estructura de apoyo, que no estaban contemplados en el informe financiero original.

También abordó la cuestión de la gradualidad en la implementación de la Fiscalía Supraterritorial, un tema que consideró de gran importancia tanto desde el punto de vista de las finanzas públicas como de la eficacia en el combate al crimen organizado. Reconoció que, aunque el Ministerio Público preferiría una implementación más rápida, entiende que las decisiones sobre finanzas públicas deben ser tomadas con prudencia y responsabilidad. A pesar de ello, enfatizó la urgencia de contar con los

recursos necesarios para enfrentar los problemas de crimen organizado y delitos de alta complejidad que afectan al país.

Finalmente, el Fiscal Nacional reiteró la necesidad de ajustar la dotación de personal para las delegaciones macrozonales de la Fiscalía Supraterritorial y señaló que, sin los recursos adicionales solicitados, sería difícil implementar estas delegaciones de manera efectiva. Concluyó su intervención subrayando que el combate al crimen organizado y los delitos de alta complejidad es una prioridad urgente para el país, y que se requiere un compromiso firme para dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para cumplir con esta misión.

La Gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señora Ana María Morales Peillard, explicó que la propuesta original trabajada con el Ejecutivo para la Fiscalía Supraterritorial consideraba una dotación de 80 personas, incluyendo 35 fiscales (34 fiscales adjuntos y un fiscal jefe supraterritorial). Sin embargo, al incluir la necesidad de establecer macrozonas en la discusión, se rediseñó la estructura para tener una Fiscalía Supraterritorial centralizada junto a la Fiscalía Nacional, más fiscalías en las macrozonas: norte, centro (particularmente en la zona portuaria), y sur. Este rediseño requería una dotación total de 112 funcionarios, manteniendo los 35 fiscales y sumando personal de apoyo, especialmente analistas.

Mencionó que, aunque la indicación del Ejecutivo incrementó la dotación de 80 a 98 personas para implementar estas fiscalías macrozonales, esa propuesta no fue coordinada con su equipo. Al tratar de ajustar la dotación dentro de los recursos disponibles, pudieron asignar dotaciones completas en la macrozona norte (18 personas) y en la macrozona sur (17 personas). Sin embargo, la macrozona centro, que es clave por su carácter portuario, solo podría contar con 12 funcionarios, incluyendo 6 fiscales adjuntos y 3 abogados asistentes, pero sin ningún analista, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades de esa área.

La diferencia entre la indicación del Ejecutivo y la propuesta original es de 12 personas, lo que es crucial para completar la dotación necesaria, especialmente en la macrozona centro, donde la actividad portuaria está relacionada con problemas graves como el narcotráfico y el contrabando, que son competencias clave para la Fiscalía Supraterritorial.

El Diputado Sepúlveda manifestó preocupación por la indicación presentada por el Ejecutivo, la que no habría sido consensuada con la Fiscalía y pidió al Ministro que aclare la situación. Por otra parte manifestó dudas sobre quién presentó el proyecto, si fue el Fiscal Nacional o el Ejecutivo, planteando si, en adelante, se tendría que consultar a interlocutores directos para los proyectos específicos. Finalmente, solicitó información al Fiscal Nacional sobre el incremento en el número de funcionarios del Ministerio Público durante los cuatro años del gobierno actual.

El Ministro Marcel abordó la cuestión de la indicación presentada por el Ejecutivo, reconociendo que no fue consensuada con la Fiscalía en su momento. Señaló que, aunque existen dudas sobre quién debería presentar el proyecto, ya sea el Fiscal Nacional o el Ejecutivo, es importante que se mantenga la coherencia en la presentación de proyectos de ley.

En cuanto al manejo del presupuesto, el Ministro explicó que el Ministerio de Hacienda no se involucra en la asignación específica de funcionarios dentro del Ministerio Público. En lugar de eso, se fija un presupuesto global con una dotación de personal, y es la estructura interna de la institución la que decide cómo

asignar los recursos. Este enfoque se aplica a todas las instituciones, y especialmente al Ministerio Público, que es una entidad autónoma.

Destacó que, aunque se suele enfocar en los detalles de un proyecto de ley específico, es crucial tener una visión de conjunto. Mencionó que el Ministerio Público está actualmente gestionando dos proyectos de ley: el de fortalecimiento del Ministerio Público y el de la Fiscalía Supraterritorial. Juntos, estos proyectos incrementarán el presupuesto del Ministerio Público de aproximadamente 268 mil millones de pesos a 321 mil millones de pesos y aumentarán la dotación de personal de 4,322 a 5,239 personas, incluyendo un aumento de 240 fiscales y 677 funcionarios adicionales.

Este incremento significativo de personal, que asciende a 917 nuevos funcionarios, es visto como una gran responsabilidad para el Ministerio Público en cuanto a la gestión de recursos y personal. El Ministro subrayó que el esfuerzo realizado en términos de recursos y dotación de personal es considerable y está siendo manejado dentro del presupuesto actual, sin depender de recursos adicionales. Concluyó enfatizando la importancia de una gestión integral de la institución, evitando una visión fragmentada del presupuesto y los recursos.

El Diputado Bianchi destacó que la discusión no se trata simplemente de 12 funcionarios administrativos adicionales, sino de asegurar que la Fiscalía Supraterritorial cuente con todos los recursos necesarios para cumplir su misión. Subrayó que, dado el contexto de seguridad y justicia en el país, es crucial que el Estado y el gobierno proporcionen al Ministerio Público todo lo que solicite para garantizar la eficiencia en la persecución de delitos graves. Instó a que se realice el esfuerzo de dotar a la fiscalía con los recursos completos, incluyendo los 12 funcionarios adicionales solicitados, argumentando que solo así se podrá exigir al Fiscal Nacional el cumplimiento efectivo de sus propuestas y mejorar la seguridad y la justicia en el país.

El Diputado Mellado explicó que ni la Fiscalía ni el Ministerio tienen mucha culpa en la situación actual, ya que el problema surgió en la Comisión de Constitución cuando se introdujo la idea de las fiscalías macrozonales en lugar de solo una Fiscalía Supraterritorial nacional. Esto cambió la distribución de personal necesario. reconoció que el gobierno ya ha hecho un esfuerzo, pero pidió un esfuerzo adicional, considerando que el presupuesto total de 1,2 mil millones de pesos para la fiscalía es relativamente pequeño en el contexto del presupuesto nacional. Sugirió que se podrían hacer ajustes en otras áreas para liberar recursos, señalando que estos 12 puestos adicionales no son fiscales, sino personal de apoyo, y que el costo adicional es mínimo. También señaló que, si no se llega a un acuerdo, se podría considerar rechazar la parte de las macrozonas y llevar el tema a una comisión mixta.

El Diputado Donoso argumentó que detener el delito no solo es crucial para la seguridad del país, sino que también tiene un impacto directo en la recaudación fiscal. Explicó que, si se logra recuperar la zona sur, actualmente dominada por actividades ilícitas que no pagan impuestos, se podría revitalizar la economía local y aumentar los ingresos fiscales. Además, señaló que el país enfrenta una situación extremadamente grave, con un número elevado de muertes relacionadas con el crimen organizado, lo que subraya la urgencia de actuar. Enfatizó que los 12 funcionarios adicionales solicitados, aunque representan un pequeño costo en el contexto global, son esenciales para que la fiscalía pueda responder efectivamente a estos desafíos. Argumentó que una fiscalía más eficiente no solo mejorará la seguridad, sino que

también contribuirá al financiamiento del Estado al permitir una mejor persecución de quienes evaden impuestos y cometen delitos.

El Diputado Sáez expresó su sorpresa por la situación en la que se encuentra la Comisión, recordando que cuando se presentó el proyecto hace dos semanas, se mencionó que venía con un alto grado de acuerdo y que sólo se esperaba su aprobación sin mayores objeciones. Refrendó el punto del Ministro Marcel sobre la importancia de tener una visión más amplia del panorama fiscal, considerando tanto al Ministerio Público como al aparato público en general. Señaló que, aunque mejorar la persecución de delitos podría aumentar la recaudación, también es crucial potenciar otros servicios públicos esenciales. Criticó la tendencia a enfocar el debate en asuntos menores, como los 12 funcionarios adicionales, y sugirió que se honre el acuerdo previo, se avance en la discusión, y se proceda con la votación, considerando que el proyecto es un esfuerzo significativo que mejorará la capacidad del Ministerio Público para abordar la criminalidad cada vez más compleja en el país.

El Diputado Sepúlveda expresó su preocupación sobre el aumento de recursos solicitados por el Ministerio Público, resaltando la importancia de este organismo en la lucha contra la delincuencia, pero cuestionando cómo se deberían gestionar los recursos limitados del Estado cuando otros servicios públicos también requieren apoyo financiero. Subrayó que, aunque el crecimiento del Ministerio Público es esencial, otros sectores también enfrentan problemas que requieren atención. Destacó que se está pidiendo más recursos sin que se hayan otorgado mecanismos para aumentar la recaudación, como una reforma tributaria. También cuestionó la responsabilidad del Ministerio de Justicia en defender estos incrementos presupuestarios y mostró su frustración por la falta de recursos suficientes para cubrir todas las necesidades.

El Diputado Romero expresó su escepticismo sobre la eficacia de los recursos asignados en el proyecto para cumplir con el objetivo de perseguir la delincuencia con la intensidad prometida por el Presidente de la República. Criticó lo que considera una mala priorización de los recursos públicos, citando específicamente los fondos destinados a programas de apoyo a la identidad de género, y sugirió que ese dinero podría utilizarse mejor en seguridad. Indicó que, si no se ven cambios significativos, estaría dispuesto a votar en contra del proyecto y aseguró que, si su partido llegara al gobierno, los recursos destinados a ideologías de género se redirigirían hacia la seguridad.

La Diputada Yeomans hizo un llamado a tomar el debate con seriedad, criticando la afirmación del Diputado Romero sobre la falta de recursos en el proyecto. Explicó que el proyecto está financiado, especialmente en la creación de la nueva institucionalidad y en su implementación inicial. Señaló que algunos puntos mencionados, como el cuestionamiento de otras partidas presupuestarias, son legítimos, pero pertenecen al debate de la ley de presupuesto, no a la discusión sobre la creación de esta nueva institucionalidad. Instó a no mezclar los debates, ya que esto podría dificultar el consenso, y subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad responsable de perseguir el delito. Finalmente, expresó su deseo de que la votación sobre el proyecto se realice ese mismo día.

El Diputado Sauerbaum recordó que la discusión actual se debe a una discrepancia que surgió en la última sesión sobre los números presentados, señalando que fue evidente la diferencia en los datos. Pidió al Fiscal Nacional o al

Ministro de Justicia que expliquen la razón detrás de esta diferencia con el Ministerio de Hacienda. Mencionó que la decisión de la comisión se centrará en si las 12 personas adicionales, que están en cuestión, son justificadas lo suficiente como para votar a favor o en contra del presupuesto. Concluyó diciendo que, dependiendo de los méritos de estas contrataciones, se decidirá si se vota a favor o en contra del proyecto.

El Diputado Naranjo expresó su sorpresa por la discusión en curso, señalando que la creación de una nueva institucionalidad es una oportunidad que muchas otras instituciones públicas desearían tener para mejorar su eficiencia. Mencionó que se ha demostrado una flexibilización y comprensión por parte del Ministerio de Hacienda. Lo que le parece insólito es que una institución presente desacuerdos sobre el financiamiento en la Comisión de Hacienda, después de que se supone que debió haber habido conversaciones previas con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda para concordar el número de personal. Sugirió que se observe cómo funciona la nueva institucionalidad y que, si es necesario más personal en el futuro, se podría evaluar en la discusión del presupuesto. Enfatizó que ya se han otorgado recursos adicionales y que le resulta sorprendente que se ponga en discusión la palabra de los ministros involucrados en este acuerdo.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su preocupación por la falta de conciencia sobre la gravedad del crimen organizado y el narcotráfico en la discusión. Mencionó que, en varios países, al no darle la importancia debida a estos problemas, terminaron perdiendo la batalla contra estas amenazas. Destacó la necesidad urgente de fortalecer al Ministerio Público para que pueda combatir eficazmente el crimen organizado, señalando que la falta de coordinación entre regiones debilita estos esfuerzos. Criticó que se esté debatiendo por la asignación de unos pocos funcionarios, comparando la situación con otros gastos que no tienen la misma prioridad. Subrayó que la seguridad es un problema crítico en Chile y que es fundamental dotar a las instituciones responsables de los recursos necesarios para enfrentar esta lucha.

El Diputado Barrera señaló que existe una contradicción en la discusión, ya que se critica al Estado por aumentar su tamaño y endeudarse, pero al mismo tiempo se pide contratar más personal. Reconoció la importancia y urgencia del proyecto de la fiscalía supraterritorial, destacando que se trata de un avance significativo con una contratación considerable de fiscales y funcionarios. Sugirió que, aunque no se alcance la configuración ideal de personal en el primer año, hay un plazo de tres años para que la fiscalía entre en régimen, lo que permitirá evaluar y ajustar la dotación de personal si es necesario. Consideró que frenar el proyecto en este momento sería extremista, dado que es urgente y puede ajustarse en el futuro conforme se disponga de más recursos, especialmente cuando se aprueben otros proyectos como el de cumplimiento tributario.

El Diputado Donoso expresó que la razón de postergar la votación del proyecto fue precisamente la ausencia del Ministerio de Hacienda en la sesión anterior. Señaló que el objetivo de la sesión actual era escuchar al Ministerio de Hacienda y explorar si había alguna posibilidad de incrementar el número de funcionarios para la fiscalía supraterritorial, incluso si fuera de manera escalonada. Subrayó que la comisión esperaba una propuesta concreta que mejorara la situación discutida anteriormente, y si no fuera posible, que se dijera claramente. Añadió que, aunque los parlamentarios del gobierno parecían estar alineados con la postura del ejecutivo, a él y a otros les gustaría ver un avance en la propuesta.

El Diputado Sepúlveda expresó su apoyo a las palabras del Diputado Donoso, señalando que comprendía que el gobierno había presentado su postura final sobre el número de funcionarios adicionales que podrían ser asignados a la fiscalía supraterritorial. Sin embargo, manifestó su preocupación sobre si pudiera haber alguna posibilidad futura de renegociación o ajustes en otros ámbitos. Quería confirmar con certeza si esta era realmente la última palabra del gobierno, sin espacio para futuras negociaciones o ampliaciones, ya que sentía que, aunque la cifra de 12 funcionarios no era grande y no involucraba a fiscales, aún dejaba dudas. Pidió claridad al gobierno sobre si este era el máximo esfuerzo posible y si hubiera flexibilidad en el futuro, con el fin de cerrar el debate de manera definitiva.

El Diputado Bianchi (Presidente) expresó su preocupación por la posibilidad de que los acuerdos finales sobre el proyecto de ley se alcancen en el Senado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, lo que generaría frustración en la comisión. Subrayó la importancia de que, si el Gobierno decide no incluir a los 12 funcionarios administrativos adicionales solicitados, esta decisión sea definitiva y no se modifique en el Senado, ya que considera crucial que el proceso sea transparente y respetuoso con el trabajo realizado en la comisión, especialmente dada la relevancia del proyecto para la seguridad nacional.

El Ministro de justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega, precisó que el proyecto de ley en discusión fue presentado por el Ejecutivo, no por el Fiscal Nacional, subrayando que la responsabilidad de esta iniciativa recae en el Ejecutivo, como corresponde dentro del marco institucional. Afirmó que es natural que existan diferencias de enfoque entre instituciones, pero esto no debe interpretarse como un conflicto, sino como parte del funcionamiento normal de un sistema institucional robusto.

Hizo hincapié en la importancia de entender este proyecto en el contexto más amplio del plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que actualmente se encuentra en trámite en el Senado. Este plan, junto con el proyecto de fiscalía supraterritorial, representa un esfuerzo significativo por parte del Ejecutivo para mejorar las capacidades del Ministerio Público. En este sentido, destacó que el Ejecutivo ha mostrado una gran disposición a adaptarse y flexibilizarse durante la tramitación de estos proyectos, respondiendo a las críticas constructivas y ajustando los informes financieros y las dotaciones en función de las necesidades identificadas.

Además, señaló que este es el tercer intento del Ejecutivo de ajustar la dotación de personal para la fiscalía supraterritorial, luego de que propuestas anteriores fueran rechazadas en la Comisión de Constitución. El Ejecutivo ha hecho todo lo posible para presentar una propuesta que equilibre las necesidades operativas del Ministerio Público con las realidades fiscales del país.

El Ministro Cordero también destacó que, en términos de fortalecimiento institucional, el esfuerzo dirigido al Ministerio Público es el más significativo en la administración pública chilena actual. Este esfuerzo no solo incluye el aumento de recursos y personal, sino también la incorporación de cambios organizacionales que buscan mejorar la eficacia y eficiencia del Ministerio Público en su lucha contra el crimen organizado y otros delitos complejos.

Finalmente, reconoció que, aunque hay diferencias en cuanto a la dotación específica de personal (en particular, los 12 funcionarios adicionales solicitados), estas se pueden abordar a través de la gestión interna del Ministerio Público. Enfatizó que la flexibilidad del Ejecutivo ha estado presente durante todo el

proceso de tramitación, y reiteró el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de esta institución clave para la seguridad y justicia en el país.

El Fiscal Nacional señor Ángel Valencia enfatizó que los 12 funcionarios en cuestión no son simplemente personal administrativo, sino que incluyen analistas cruciales para las delegaciones macrozonales, que deben contar con equipos sólidos para el análisis de datos y la atención a víctimas y testigos, además de otras funciones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la fiscalía supraterritorial. Subrayó que la creación de estas delegaciones requiere una dotación adecuada, y la propuesta actual no alcanza para financiar tres delegaciones completas. Presentó dos posibles soluciones: redistribuir personal existente, lo que sería contraproducente al debilitar otras áreas ya en proceso de fortalecimiento, o ajustar la ley para limitar el número de delegaciones. Explicó que la discrepancia no solo reside en la cantidad de personal, sino en la capacidad real de cumplir con los objetivos propuestos por la ley, poniendo en cuestión si se podrá implementar efectivamente las tres delegaciones macrozonales previstas.

Además, insistió en que la fiscalía supraterritorial es una de las herramientas más importantes diseñadas en los últimos años para combatir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, subrayando que su implementación es crítica para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la democracia en Chile y la región. Destacó que la eficacia de esta herramienta depende de contar con los recursos necesarios desde el inicio, y que cualquier compromiso en la dotación de personal podría limitar su capacidad operativa. Finalmente, reconoció la realidad de las restricciones fiscales y reiteró la importancia de priorizar este proyecto dentro del marco de las capacidades financieras del país, destacando que su éxito es fundamental para enfrentar uno de los problemas más graves que afecta actualmente a la sociedad chilena.

El Diputado Bianchi precisó que no se puede permitir que la implementación de las delegaciones regionales—norte, sur y centro—se vea comprometida por la falta de 12 funcionarios. Destacó la importancia de estas macrozonas para la articulación de estrategias cruciales en la lucha contra el crimen organizado y la función de la fiscalía supraterritorial. Preguntó si estos 12 funcionarios son necesarios de inmediato o si su incorporación puede ser gradual a lo largo de los tres años que abarca el proyecto. Sugirió que, si bien estos funcionarios son necesarios, podría haber una redistribución temporal mientras se aseguran los recursos en discusiones presupuestarias futuras. Finalmente, solicitó al Ministro Marcel claridad sobre si se puede garantizar el presupuesto para cubrir esta necesidad en el corto plazo, reiterando la importancia de no comprometer la efectividad de la fiscalía supraterritorial por un asunto de recursos relativamente menor.

El Diputado Sáez expresó su preocupación respecto a las afirmaciones del Fiscal Nacional, quien insinuó que los acuerdos suscritos con el gobierno podrían no ser confiables. Consideró que estas declaraciones no son aceptables, y subrayó que nadie está minimizando la importancia de los 12 funcionarios en cuestión ni la labor que desempeñarían. Sin embargo, consideró que sugerir que los acuerdos alcanzados no son fiables cruza un límite que, en su opinión, no es tolerable.

El Ministro Marcel comentó su experiencia en la implementación de importantes reformas judiciales en Chile, como la reforma procesal penal y la reforma de

los tribunales de familia, destacando la complejidad y los desafíos que estas implicaron en términos de recursos. Subrayó que, desde el inicio de la actual administración, se comprometió con el fortalecimiento del Ministerio Público, participando en un acuerdo significativo para aumentar sus recursos, que se ha distribuido en un plan plurianual.

Expresó su preocupación por cómo el debate se había centrado en la diferencia de 12 funcionarios, cuestionando si esta diferencia realmente podría afectar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado o la implementación del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Aclaró que los 12 cargos en cuestión incluyen roles como gestores, analistas, un profesional de apoyo, un soporte informático, un conductor y un asesor comunicacional, y que no deberían considerarse como la pieza clave de todo el sistema.

El Ministro Marcel subrayó que el Ejecutivo ha realizado ajustes en los proyectos durante el proceso legislativo, pero advirtió que no pueden continuar agregando cambios en cada etapa. Insistió en que los informes financieros se realizan para ser cumplidos y respetados, y que no tienen previsto hacer más cambios significativos en el proceso legislativo. Concluyó resaltando la importancia del proyecto para la institucionalidad del Ministerio Público y el compromiso del Ejecutivo en asignar los recursos necesarios para su correcta implementación.

El Diputado Bianchi (Presidente) expresó su valoración positiva hacia el trabajo reciente de la Fiscalía Nacional, reconociendo un juicio personal favorable hacia el Fiscal Nacional. Destacó la importancia de tener una mirada detallada y minuciosa, como la que el Fiscal ha demostrado al enfocarse incluso en roles específicos dentro de la institución, como conductores o estafetas. Enfatizó que, aunque no se haya logrado cumplir con todas las demandas del Fiscal Nacional en esta discusión, especialmente en relación a los 12 funcionarios adicionales, confía en que el Fiscal hará todo lo posible para que la Fiscalía Supraterritorial cumpla con los objetivos que Chile necesita. Subrayó que la responsabilidad de la Fiscalía es enorme y que el país demanda eficiencia en su labor, indicando que el foco debe estar en sacar adelante este importante proyecto de justicia, más allá de los detalles específicos de la dotación de personal.

VOTACIÓN

A continuación la Comisión sometió a votación los artículos sometidos a su competencia que fueron indicados por la Comisión Técnica.

“Artículo 1°.- Modifícase la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en el siguiente sentido:

25) Agrégase en la planta contenida en el artículo 72, a continuación de la referencia al cargo de Fiscal Nacional y antes de la referencia al cargo de Fiscal Regional, un cargo grado III, denominado “Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial”.

Sometido a votación el numeral 25) del artículo 1° resultó aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes. Votaron a favor los Diputados (as) señores (as) Barrera, Bianchi, Cifuentes, Donoso, Mellado, Naranjo, Rojas, Romero, Sáez, Sauerbaum, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

“Artículo 1°.- Modifícase la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en el siguiente sentido:

26) Modifícase el artículo 74 en el siguiente sentido:

a) Incorpórase, en su inciso primero, entre la palabra “Regionales” y la palabra “tendrán”, la frase “y el Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo: “Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, en el caso del Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial, se entenderá que se desempeña en el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago.”.

Sometido a votación la letra a) del numeral 26) del artículo 1° resultó aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes. Votaron a favor los Diputados (as) señores (as) Barrera, Bianchi, Cifuentes, Donoso, Mellado, Naranjo, Rojas, Romero, Sáez, Sauerbaum, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

Sometido a votación la letra b) del numeral 26) del artículo 1° resultó aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes. Votaron a favor los Diputados (as) señores (as) Barrera, Bianchi, Cifuentes, Donoso, Mellado, Naranjo, Rojas, Romero, Sáez, Sauerbaum, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

A continuación, la Comisión procedió a la votación de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo:

“ARTÍCULO 2°, NUEVO

Para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes:

“Artículo 2°.- Incrementase la planta del Ministerio Público, contenida en el artículo 72 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, creándose, en la planta de personal, noventa y siete nuevos cargos, en los términos y la cantidad que a continuación se indican:

a) Para el cargo de Fiscal Adjunto, incrementase el número de cargo en 34.

b) Para el cargo de Profesionales, incrementase el número de cargo en 43.

c) Para el cargo de Técnicos, incrementase el número de cargo en 14.

d) Para el cargo de Administrativos, incrementase el número de cargo en 6.”.

Previo a la votación del artículo, algunos diputados justificaron su voto al tenor de los siguientes argumentos:

El Diputado Mellado anticipó que se abstendría con la esperanza de que el Ejecutivo aumente el número de dotación prevista para la Fiscalía Supraterritorial al tenor de lo solicitado por el Ministerio Público.

El Diputado Naranjo justificó su voto a favor destacando que el Gobierno ha demostrado ser confiable en su tramitación del proyecto, lamentando que el Fiscal Nacional haya dudado de los compromisos del Gobierno y subrayando que el cumplimiento del compromiso queda claro.

El Diputado Romero anticipó su voto en contra respaldando la argumentación dada por el Fiscal Nacional y expresando que mientras aquellos aspectos no se mejoren no aprobaría el proyecto de ley.

El Diputado Sepúlveda justificó su voto anticipando que votaría a favor, destacando que se ha hecho un esfuerzo importante para avanzar. Reconoce el compromiso del Ministro en cuanto a recursos, y enfatiza que el proyecto abarca aspectos más amplios que solo la cantidad de cargos. Destaca que este avance es significativo comparado con el apoyo recibido en anteriores gobiernos.

El Diputado Von Mühlenbrock anunció que se abstendría y valoró la presencia y argumentación del Fiscal Nacional ante esta Comisión, esperando que el Ejecutivo considere aumentar los doce cargos en la dotación que resultan necesarios para afrontar el problema de seguridad.

El Diputado Bianchi (Presidente) expresó que, a diferencia de los fiscales nacionales anteriores, tiene esperanza en la gestión actual del fiscal nacional y cree que la nueva Fiscalía Supraterritorial, que abarca tres macrozonas, es crucial para enfrentar el crimen organizado. Reconoció la importancia de estos 12 funcionarios adicionales, pero sugirió que cualquier modificación necesaria se podría hacer en el futuro, no en el Senado necesariamente. Destacó la urgencia de fortalecer la fiscalía y no repetir errores anteriores, esperando que el proyecto avance para mejorar la respuesta del país al crimen organizado, por lo que anunció su voto favorable.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo para incorporar un artículo 2° nuevo, resultó aprobada por ocho votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cifuentes, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Se abstuvieron los Diputados Donoso, Mellado, Sauerbaum y Von Mühlenbrock. Votó en contra el Diputado Romero.

“ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, NUEVO

2) Para agregar, a continuación del artículo primero transitorio, el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo segundo transitorio.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero transitorio, las modificaciones al artículo 72 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, introducidas en la presente ley por el numeral 25 del artículo 1° y por el artículo 2°, tendrán lugar conforme con la gradualidad que a continuación se indica:

CARGO/GRADOS	INCREMENTO DEL NÚMERO DE CARGOS		
	A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY	A PARTIR DEL DÍA 1 DEL DÉCIMO TERCER MES CONTADO DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY	A PARTIR DEL DÍA 1 DEL VIGÉSIMO QUINTO MES CONTADO DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY
FISCAL JEFE DE LA FISCALÍA SUPRATERITORIAL GRADO III	1		
FISCAL ADJUNTO GRADOS IV-VIII	14	20	
PROFESIONALES VI-XI	19	19	5
TÉCNICOS IX-XIV	6	6	2
ADMINISTRATIVOS XI-XVII	3	3	

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo para incorporar un artículo segundo transitorio nuevo resultó aprobada por ocho votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cifuentes, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Se abstuvieron los Diputados Donoso, Mellado, Sauerbaum y Von Mühlenbrock. Votó en contra el Diputado Romero.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, NUEVO

3) Para agregar, a continuación del artículo segundo transitorio, nuevo, el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:

“Artículo tercero transitorio.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de la presente ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Público. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo para incorporar un artículo tercero transitorio nuevo, resultó aprobada por doce votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cifuentes, Donoso, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez, Sauerbaum, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Votó en contra el Diputado Romero.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos sometidos a su conocimiento, en la forma explicada.

Tratado y acordado en las sesiones ordinarias de miércoles 14 y martes 27 de agosto del año en curso, con la asistencia presencial de los diputados señores, Boris Barrera Moreno, Carlos Bianchi Chelech (Presidente), Ricardo Cifuentes Lillo, Miguel Mellado Suazo, Jaime Naranjo Ortiz, Agustín Romero Leiva, Jaime Sáez Quiroz, Frank Sauerbaum Muñoz, Alexis Sepúlveda Soto, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y señoras Camila Rojas Valderrama y Gael Yeomans Araya.

En las dos sesiones el diputado Guillermo Ramírez Díez fue reemplazado por el diputado Felipe Donoso Castro y en la sesión del 14 de agosto, el diputado Carlos Bianchi Chelech (Presidente) fue reemplazado por la Diputada Marta González Olea.

Sala de la Comisión, a 27 de agosto de 2024.

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de Comisiones